

AÑO DE 1860.

Martes 2 de octubre.

Número 119.

Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por Arimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Barcelona 25 de setiembre á las cinco y media de la tarde.—El Presidente del Consejo de Ministros al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, saludos. La salud de S. M. la Reina sigue sin novedad, así como la de su augusta Real familia. Las muestras de adhesión por parte de los catalanes hacia la Real Persona crecen de día en día.

Anoche S. M. se dignó asistir al teatro del Liceo, donde fue objeto de una extraordinaria ovación; así como a la ida y la vuelta, ésta se verificó a los dos de la madrugada. Una multitud immense llenaba la anchurisa Rambla y demás calles del tránsito, ansiosa de manifestar a S. M. su lealtad y su entusiasmo.

(Gaceta de Madrid núm. 270.)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Barcelona 26 de setiembre á las cinco y tres minutos de la tarde.—El Presidente del Consejo de Ministros al Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación:

La salud de S. M. la Reina y su augusta Real familia continúa sin novedad. Es cada vez mayor el entusiasmo que la presencia de las Reales Personas despierta en esta capital; donde tanto las clases se esfuerzan a portar con más fervor a S. M. la Reina su profunda adhesión. Esta noche asistirán S. M. MM. a la función preparada por el Ayuntamiento en los Campos Elíseos.

(Gaceta de Madrid núm. 271.)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Barcelona 27 de setiembre á las siete y quince minutos de la tarde.—El Presidente del Consejo de Ministros al Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación:

S. M. la Reina y su augusta Real familia continúan sin novedad en su imponente salud.

Las manifestaciones de adhesión hacia S. M. son cada vez más vivas y espontáneas por parte del pueblo catalán. Una S. M. Allorcadota desde el Palacio a los Campos Elíseos, donde fué mayor, si

caió el entusiasmo. La iluminación y los fuegos artificiales con que se obsequio a S. M. fueron de un efecto sorprendente.

Hoy se ha dignado visitar S. M. el establecimiento fabril La España Industrial, y después ha distribuido por su régimen los premios á los artesanos que por su virtud y laboriosidad se han hecho dignos de esta recompensa.

Esta noche S. M. concurrirán al teatro Principal.

(Gaceta de Madrid núm. 272.)

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 570.

En la Gaceta de Madrid número 270 del miércoles 26 de setiembre último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE MARINA.

REAL DECRETO.

En atención á las circunstancias que concurren en el Brigadier de la Armada D. José Montijo y Albizu,

Vengo en promoverle al empleo de Jefe de Escuadra supernumerario.

Dado en la mar, á bordo de la fragata Princesa de Asturias, á 21 de setiembre de 1860.—Está rubricado de la Real marina.—El Ministro de Marina, Juan de Zavala.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Comercio.

Vista la ley de 11 de julio de 1856, por la cual se facultó á los socios de las empresas concesionarias de obras públicas para emitir obligaciones al portador con interés fijo y amortización determinada dentro del período de la concesión, con billete de las obras y rendimiento del ferro-carril, canal ó obra pública á cuya explotación se destinan, y determinó que el importe de todas las obligaciones emitidas no pudiese nunca exceder de la mitad del capital realizado de las acciones de la sociedad;

Vista la ley de 11 de julio del corriente año, que amplía la emisión de obliga-

ciones hasta el importe de la suma total del capital realizado, y considera como tal para este efecto la subvención concedida de fondos públicos, provinciales ó municipales, á medida que las compañías la reciban.

Considerando:

1.º Que con arreglo al texto de las disposiciones de las leyes expresadas, la cifra de las obligaciones que las compañías concesionarias de Obras públicas están autorizadas para emitir es la equivalente al valor nominal de las mismas:

2.º Que si el Gobierno ha concedido á alguna de dichas compañías, y con anterioridad á la última de las expresadas leyes, autorización para que la cifra de las emisiones se computase por el tipo del valor real de las obligaciones ó sea por la cantidad que produjese su negociación en el mercado, estas autorizaciones, concedidas como gracias especiales en interés del desarrollo de las empresas, y teniendo en cuenta la poca latitud que la legislación anterior concedía al uso del crédito, no pueden continuar después que la ley de 11 de julio último ha extendido dicho uso en más vasta escala;

S. M. la Reina, sin perjuicio de las demás disposiciones reglamentarias á que pueda dar lugar la mencionada ley, se ha servido decretar lo siguiente:

1.º La suma de las obligaciones que las empresas concesionarias de obras públicas están facultadas para emitir, con arreglo al art. 1.º de la ley de 11 de julio del corriente año, se computará en razón de su valor nominal, ó sea de la cantidad que dichas obligaciones representen.

2.º Las compañías que hubiesen alcanzado la gracia de que la emisión de sus obligaciones se computara para los efectos de la ley de 11 de julio de 1856 por el tipo de su negociación, ó sea por la cantidad que produjese en el mercado, se atemperarán á lo dispuesto en la regla anterior. En su consecuencia, las compañías que se hallasen en aquel caso computarán las emisiones hechas al tipo del valor representativo de sus obligaciones para calcular la cantidad que aun les es dado emitir.

3.º Los Gobernadores de las provincias y delegados del Gobierno en dichas compañías, respectivamente, vigilarán cuidadosamente el cumplimiento de esta disposición.

Lo que de orden de S. M. manifiesto á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. San Ildefonso 51 de agosto de 1860.—Corvera.—Señor....

SEGUNDA SECCION.

CIRCULAR NÚMERO 571.

Dirección de Gobierno.—Negociado 4.^o
Mandando proceder á la busca y captura de María Antonia Otero y Pérez.

Los señores Alcaldes de los pueblos de esta provincia, empleados de vigilancia, Guardia civil y demás dependientes de mi autoridad, procederán á la busca y captura de María Antonia Otero Pérez, cuyas señas se expresan á continuacion, la cual desertó de la casa-galería de la Coruña; y caso de ser habida, sea puesta á disposición de este Gobierno. Orense 29 de setiembre de 1860.—Francisco Javier Camuño.

Señas de la María Antonia Otero.

Natural de San Pedro de Muros provincia de la Coruña; vecindada en Santa María de Arelan, hija de José y de Bernarda, edad 17 años, estado soltera, pelo negro, cejas idem, ojos castaños, nariz recta, cara redonda, boca regular, color rosado, estatura 4 pies.

CIRCULAR NÚM. 572.

Sección de Gobierno.—Negociado 4.^o
Mandando proceder á la busca y captura del autor ó autores del robo cometido en la Iglesia de San Martín de Riobó.

Los Sres. Alcaldes de los pueblos de esta provincia, empleados de vigilancia, Guardia civil y demás dependientes de mi Autoridad, procederán á la busca y captura del autor ó autores del robo cometido en la iglesia parroquial de San Martín de Riobó en la madrugada del dia 26 del próximo pasado mes; los cuales, caso de ser habidos, seán puestos á disposición de este Gobierno con los efectos que en su poder se encuentren; advirtiendo que los robados son los que aparecen á continuacion.

Orense 1.º de octubre de 1860.—Francisco Javier Camuño.

Alhajas que se citan.
Un cáliz de plata y copa de oro,

otro usadlo de plata, dos patenas y dos cuchillas, un incensario de plata, una naveta id. con su cuchara, un viril, una cruz grande parroquial de mucho valor y forma antigua, la cruz de plata de un pendón con su cordón de seda, el sagrario de plata para conducir el Viático a los enfermos.

CIRCULAR NUM. 573.

Beneficencia y Sanidad.—Negociado 3º

Mandando averiguar la naturaleza y procedencia de una mujer demente.

Los Sres. Alcaldes de esta provincia se servirán manifestar á este Gobierno á la mayor brevedad, si una demente que se halla detenida en la cárcel de esta capital desde el mes de julio último, y cuyas señas se expresan á continuación, es natural, vecina ó procedente de sus respectivos pueblos.

Orense 1º de octubre de 1860.
—Francisco Javier Camuño.

Señas de la demente.

Edad como de 50 años, estatura regular, cara ancha, color trigueño.

Continúa la lista de la suscripción de acciones al ferro-carril de Galicia titulado del PRINCIPE DON ALFONSO.

SUSCRITORES. Núm.º SU VALOR
de ac-
ciones. Rs. vn.

Suma anterior... 1,672 3.544,000

Senores Don:

Miguel Calapris y Losada, abad de San	12,000
Payo de Abelerda, abad de Santa María de Parada de Outeiro.....	5 · 6,000
Benito Vazquez.....	5 · 6,000

TOTAL HASTA LA FECHA 1,684 3.568,000

Orense 28 de setiembre de 1860.—Francisco Javier Camuño.

(Se continuará.)

JUNTA PROVINCIAL

DE INSTRUCCION PÚBLICA DE ORENSE.

Para que las Juntas locales remitan los presupuestos para la construcción y reparación de edificios de escuela por conducto y con informe de los Ayuntamientos, quienes lo hagan á su vez de los expedientes de subvención si la necesitan.

En la disposición 13 de la Real orden de 18 de octubre del año último, dictada para la organización y arreglo de las escuelas de Galicia, y publicada en el Boletín número 135 del mismo, se ordena que las Juntas locales, formen el presupuesto para mejorar los locales de escuelas con arreglo al modelo oficial, y acompañando los planos si las circunstancias de la localidad exigiesen en aquél alguna modificación; contribuyendo á este gasto los fondos generales del Estado si los del Ayuntamiento no pueden soportarlo, con las formalidades establecidas en la Real orden de 21 de julio de 1856.

Y considerando esta Provincial de

absoluta necesidad la construcción de edificios para escuelas, particularmente en la cabeza de los distritos municipales, de que carecen la mayor parte, y reparación de los existentes, ha acordado que las Juntas locales, cumpliendo con la citada disposición, formen inmediatamente el indicado presupuesto, remitiéndolo á esta superioridad por conducto y con informe de los Ayuntamientos, quienes á su vez y en su caso instruirán los oportunos expedientes para la subvención, si la necesitan, con arreglo á la expuesta Real orden de 24 de julio.

Los señores Alcaldes se servirán dar cuenta de la presente circular en la primera sesión que celebren las Juntas y Ayuntamientos del respectivo distrito municipal.

Orense 27 de setiembre de 1860.—Francisco Javier Camuño, Presidente.—P. A. D. L. J., Eliseo Fidalgo y Saavedra, Secretario.

Para que las Juntas locales y Ayuntamientos no hagan alteración ni innovación alguna en el tramo, sin proponer antes lo conveniente.

Ha llamado la atención de esta Junta provincial el que algunas locales y Ayuntamientos, acaso por efecto de un demasiado celo, resuelven sobre nombramientos de maestros, traslaciones de éstos y locales de escuela, poniendo en ejecución sus resoluciones, sin tener presente que no solo se exceden de sus atribuciones, sino que introducen la confusión y trastornan el orden establecido para el buen régimen y progreso de la enseñanza.

A evitar estos inconvenientes, ha acordado hacer saber á todas las Juntas locales y Ayuntamientos, que en lo sucesivo bajo ningún motivo ni pretexto hagan alteración en lo existente ni innovación alguna; sin perjuicio de que cuando conceptúen útil adoptar alguna medida en beneficio de la enseñanza, propongan lo conveniente, manifestando las razones en que se funden para adoptar lo que proceda.

Los señores Alcaldes se servirán dar cuenta de la presente disposición en la primera sesión que celebren las respectivas Juntas y Ayuntamientos.

Orense 27 de setiembre de 1860.—Francisco Javier Camuño, Presidente.—P. A. D. L. J., Eliseo Fidalgo y Saavedra, Secretario.

TERCERA SECCION.

En la Gaceta de Madrid número 265 del 21 de setiembre último se lee lo siguiente:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de setiembre de 1860, en el pleito seguido por Francisco Vilarelle y el curador cada uno de los tres hermanos menores de éste sobre prestación de alimentos civiles, pendiente ante Nos por recurso de casación interpuesto por el primero contra la sentencia de la Real Audiencia de la Coruña;

Resultando que D. Andrés Vilarelle y María Pérez otorgaron una escritura en 1º de febrero de 1828, por la cual, consignando ser solteros y haber tenido cuatro hijos, de los cuales sobrevivía Francisco, estipularon y convinieron en dejarse mutuamente en entera libertad de poder contraer matrimonio como mejor les

conviniiese, bajo la condición de entregar el primero á la segunda la cantidad de 300 rs. por razón de la lactancia y cría de los niños, y de apartarse la María Pérez por sí y su hijo Francisco de pedir ni reclamar cosa alguna desde aquel día en adelante:

Resultando que en 1º de febrero de 1857 presentó demanda Francisco Vilarelle en el Juzgado de primera instancia de Ordenes con la solicitud de que se condenase á sus hermanos, hijos legítimos y herederos de D. Andrés Vilarelle, á que con arreglo y en proporción á 27.000 rs. que tocaren á éste de la herencia que sus padres habían dejado á su fallecimiento, ó según tasa judicial, le pagase los alimentos legales que justamente se le debían para subvenir á sus urgencias y perentorias atenciones, mediante á ser pobre y hallarse imposibilitado de trabajar:

Resultando que Josefa Vilarelle y el curador de los hermanos de la misma se opusieron á esta demanda; primero, porque no es cierto que su padre hubiese dejado á su muerte aquella cantidad; y segundo, porque el demandante era más rico que ellos, y no podía por lo tanto obligárseles legalmente á mantenerle.

Resultando que recibido el pleito á prueba y hecha la que los interesados conceptuaron conveniente á su propósito, dictó sentencia el Juez en 22 de julio de 1857, la cual confirmó la Sala segunda de la Audiencia de la Coruña en 10 de diciembre del mismo año, absolviendo de la demanda á la Josefa Vilarelle y sus hermanos.

Resultando que Francisco Vilarelle interpuso el preseguir recurso de casación porque, en su sentir, se había infringido la ley 8º, título 13 de la Partida 6º, cuyo epígrafe dice «cuanto puede heredar el hijo que no es legítimo en los bienes de su padre si muere sin testamento, ó el padre en los bienes de tal hijo».

Visto, siendo Ponente el Ministro Don Pablo Jiménez de Palacio,

Considerando que la obligación que las leyes impone á los herederos de alimentar á los hijos naturales de quienes el padre se olvidó, ó no hizo mérito en su testamento, es condicional y dependiente de la importancia de la herencia y del estado de fortuna de los primeros;

Considerando que este último extremo ha sido materia de prueba testifical y apreciado por la Sala sentenciadora en uso de la facultad que le confiere el artículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón no se ha infringido en la sentencia la ley 8º, título 13 de la Partida 6º.

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Francisco Vilarelle contra la sentencia pronunciada por la Sala segunda de la Audiencia de la Coruña en 10 de diciembre de 1857, y le condenamos á la pérdida de los 2.000 reales por que prestó caución para cuando llegase á mejor fortuna y al pago de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las oportunas copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastián González Nandín.—Miguel Osca.—Antero de Echarri.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Jiménez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.

Publicación.—Leída y publicada fué

la sentencia que precede por el Ilmo. Señor D. Ramon Lopez Vazquez, Presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, de que certifico como Secretario de S. M., y Escribano de Cámara en dicho Supremo Tribunal.

Madrid 18 de setiembre de 1860.—José Calatravano.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de setiembre de 1860, en los autos pendientes ante Nos en virtud de apelación interpuesta por Pedro Mansilla y otros siete vecinos del lugar de Revilla del Campo de la providencia dictada por la Sala segunda de la Audiencia de Burgos, denegatoria de la admisión del recurso de casación:

Resultando que el investigador de Propiedades y Derechos del Estado en la provincia de Burgos denunció como pertenecientes á los propios de Revilla del Campo unas fincas afectas á censo ensitético, que estaban poseyendo Pedro Mansilla y otros vecinos de dicho lugar; y que seguido el expediente sin audiencia de éstos, fué aprobada la denuncia por la Junta superior de Ventas:

Resultando que sabedores de ello dichos interesados presentaron demanda en 20 de setiembre de 1859 ante el Juzgado de Hacienda de Burgos, con la solicitud de que se declarase nula aquella denuncia, y que los bienes objeto de la misma que constaban en el apeo que debía existir en poder del Conde de Berverana, y de parte de los cuales estaban ellos en posesión, eran de su exclusivo dominio, y no de los propios de Revilla del Campo, mandando en su consecuencia se les respetara en su posesión y propiedad, con imposición de las costas á la Hacienda pública.

Resultando que por auto del 28 se negó el Juez á dar curso á la demanda por no acreditarse haber intentado previamente los interesados la vía gubernativa, y que por este motivo y por el de no justificar se hubiese deducido dentro del término señalado por la Real orden de 10 de junio de 1856, declaró en auto de 3 de octubre siguiente no haber lugar á la reforma que Mansilla y consortes pidieron del anterior, acompañando el oficio que les había pasado la Administración participándoles no daba curso á la reclamación que por su conducto dirigían al Director general de Propiedades y Derechos del Estado:

Resultando que pasados los autos á la Audiencia de Burgos por apelación de los demandantes, presentaron una certificación del Secretario del Ayuntamiento de Revilla del Campo para acreditar que habían acudido dentro del término correspondiente á usar de su derecho, y que, seguida la instancia con audiencia del Fiscal de S. M., pronunció sentencia la Sala segunda en 25 de enero último confirmando el auto apelado;

Y resultando que interpuso el recurso de casación por Mansilla y consortes, y no habiéndoles sido admitido, apelaron de esa negativa para ante este Tribunal Supremo:

Vistos, siendo Ponente el Ministro Don Pablo Jiménez de Palacio:

Considerando que la providencia dictada en estos autos por la Sala segunda de la Audiencia de Burgos, que dió motivo al recurso de casación entablado por Pedro Mansilla y litis consortes, el cual no fué admitido por dicha Sala, dando

con ello lugar á la apelación que se ventila, no es de las designadas en los artículos 1.010 y 1.011 de la ley de Enjuiciamiento civil por haber recalcado sobre un artículo de previo y especial pronunciamiento, que ni pone término al juicio ni hace imposible su continuación; Fallamos que debemos confirmar y confirmamos con las costas la providencia apelada que dictó la Sala segunda de la Audiencia de Burgos en 13 de febrero último.

Y por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta dentro de los cinco días posteriores á su fecha, y se insertará en la Colección legislativa, á cuyo efecto se pasaran las copias correspondientes, así lo pronunciaremos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Naudin.—Miguel Osca.—Joaquin de Palma y Vinuesa.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Jimenez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.

Publicación.—Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Ilmo. Sr. Don Ramon Lopez Vazquez, Presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, de que certificó como Secretario de S. M. y Escrivano de Cámara de dicho Supremo Tribunal.

Madrid, 18 de setiembre de 1860.—José Calatravano.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de setiembre de 1860, en los autos de competencia que ante Nos pende en el Juzgado de la Capitanía general de Aragón y el de primera instancia del distrito del Pilar de Zaragoza, sobre el conocimiento de la causa formada contra Esteban Arraiza y Jordan por tentativa de robo:

Resultando que el Arraiza, soldado desertor del regimiento de Zamora, fué preso por la Autoridad civil y procesado á consecuencia del robo y muerte de D. Carlos Alonso; que en aquella causa aparecieron indicaciones de que el mismo Arraiza y otro sujeto intentaron robar las casas de D. Francisco Casanova y D. Antonio Gascon; y para averiguar la existencia y autores de este delito se formó el presente proceso;

Resultando que el Juzgado de Guerra ha reclamado el conocimiento del mismo en cuanto á Arraiza, fundándose en que la Real orden de 8 de julio de 1852 derogó el decreto de las Cortes de 11 de setiembre de 1820, restablecido en 30 de agosto de 1836, y puso en observancia la ley 5.^a, tit. 9.^a, libro 10 de la Novísima Recopilación, según la cual, siempre que un soldado desertor cometiere los delitos de robo, homicidio ó otro en poblado ó despoblado, solo ó acompañado de otras personas en número menor del necesario para formar cuadrilla, debe la Justicia que lo aprehenda remitirlo á la Autoridad militar y ser juzgado por ésta; y en qué Esteban Arraiza iba acompañado únicamente de otro sujeto cuando se intentó robar á D. Francisco Casanova y D. Antonio Gascon;

Resultando que el Juez de primera instancia del distrito del Pilar de Zaragoza sostiene su jurisdicción alegando que el decreto de las Cortes arriba citado está en vigor y observancia sin que haya podido ser derogado por una Real orden; y según él los desertores del ejército que cometieren el delito de robo, sin distinción de si fué ó no en cuadrilla, deben ser juzgados por las Justicias or-

dinarias cuando fueren aprehendidos por ellas:

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Felipe de Urbina:

Considerando que por la Real orden de 8 de julio de 1852 no puede derogarse una verdadera ley, como lo es el decreto de las Cortes de 11 de setiembre de 1820, restablecido en 30 de agosto de 1836, que está vigente, y que en su art. 4.^a se declara que todo desertor del ejército ó de la armada que, solo ó acompañado, cometa un delito por el cual sea aprehendido por la jurisdicción ordinaria, debe ser juzgado sobre él por la misma exclusivamente;

Y considerando que el soldado desertor Esteban Arraiza y Jordan fué aprehendido por la Autoridad civil y puesto á disposición del Juzgado de primera instancia del distrito del Pilar de Zaragoza;

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de esta causa corresponde al expresado Juez de primera instancia, al que se remitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Gobierno e insertará en la Colección legislativa, para lo cual se pasen las oportunas copias certificadas, lo pronunciaremos, mandamos y firmamos.—Ramon Maria de Arriola.—Felix Herrera de la Riva.—Juan Maria Biey.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elío.—Domingo Moreno.

Publicación.—Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Señor D. Felipe de Urbina, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy dia de la fecha, de que certificó como Secretario de S. M. y Escrivano de Cámara.

Madrid 18 de setiembre de 1860.—Dionisio Antonio de Puga.

En la Gaceta de Madrid número 266 del sábado 22 del actual se lee lo siguiente:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 15 de setiembre de 1860, en los autos pendientes ante Nos por recurso de casación seguidos en el Juzgado de primera instancia de Alicante y en la Sala tercera de la Real Audiencia de Valencia entre D. Celestino, D. Juan Pedro y Doña Carmen Lafont, representada ésta por su marido D. Francisco de Paula Redondo, y Don Tomás Toomy, sobre remoción de éste, como sospechoso, del cargo de curador ejemplar del démente D. Juan Roque Lafont:

Resultando que el Juez de primera instancia de Alicante, en 21 de marzo de 1852, nombró á D. Tomás Toomy, curador ejemplar del démente D. Juan Roque Lafont, á solicitud de su hermano D. José Lafont y Bardisé, á quien su avanzada edad y la grave enfermedad que padecía, le impedían continuar en la curatela de aquél;

Resultando que en el citado dia otorgó su testamento D. José Lafont, en el cual nombró por albaceas á su mujer Doña María Antonia Sayignone y á Don Tomás Toomy, y por heredero usufructuario á su hermano D. Juan Roque, pasando á su muerte la propiedad de la herencia á su esposa Doña Antonia Sayignone;

Resultando que fallecido bajo este testamento D. José Lafont, en 6 de abril siguiente, y aceptada su herencia a beneficio de inventario por la viuda y el curador del démente, fueron estos autorizados por

el Juez para proceder extrajudicialmente á la partición de los bienes, que se verificó por el contador nombrado de común acuerdo por aquellos:

Resultando que en 2 de abril de 1857 D. Celestino, D. Juan Pedro y Doña Carmen Lafont, como primos carnates del démente, entablaron demanda para la remoción del curador nombrado al mismo, fundándose en que no era ciudadano español, ni persona de arraigo, habiéndose hecho su nombramiento en un dia feriado, y por lo tanto inhabil; y en otras causas, todas las cuales fueron objeto de prueba testifical:

Resultando que D. Tomás Toomy impugnó la demanda porque, además de la inexactitud de los hechos expuestos en ella, no se alegaba causa alguna suficiente para su remoción:

Resultando que, practicada por las partes la indicada prueba testifical, el Juez, por sentencia de 23 de setiembre de 1857, absolvió a D. Tomás Toomy de la demanda propuesta contra él, declarando no haber lugar á removéle por sospechoso de la curatela ejemplar de Don Juan Roque Lafont:

Resultando que confirmada esta sentencia por la Sala tercera de la Real Audiencia de Valencia, interpusieron los demandantes el presente recurso de casación, fundándose en que era contraria al espíritu de todas las leyes del tit. 18, Partida 6.^a, y también á la disposición literal de la 1.^a y de la 3.^a, según las que debían ser removido el curador si no hiciera inventario de los bienes del huérfano, y aun de oficio y sin acusación, si el Juez viere que hacia mal en la Hacienda de aquél.

Visto, siendo Ponente el Ministro Don Sebastian Gonzalez Naudin:

Considerando, que es inadmisible el primer motivo del recurso, que comprende como infringidas en su espíritu, todas las leyes del título 18, Partida 6.^a por no ser conforme esa manera vaga e indefinida de citar infracciones, á lo prescrito en el artículo 1.024 de la ley de Enjuiciamiento, el cual requiere la designación precisa y determinada de las leyes ó doctrinas legales, que se consideren infringidas:

Considerando que, existiendo en autos el inventario de los bienes del démente, no se ha saltado á lo dispuesto en la ley 1.^a, título 18, Partida 6.^a, la cual por consiguiente no ha sido infringida:

Considerando que la conducta del demandado, en concepto de curador fué objeto de prueba testifical que apreció la Sala sentenciadora con arreglo a lo prevenido en el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento:

Considerando, por tanto, que tampoco ha sido infringida la ley 3.^a del indicado título y Partida, la cual con la anteriormente referida, han sido las únicas, concreta y determinadamente citadas en el presente recurso:

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar á él, y condenamos á los recurrentes D. Celestino Lafont y consortes en las costas y á la pérdida del depósito que se distribuirá con arreglo á la ley, devolviéndose los autos á la Real Audiencia de Valencia de donde proceden.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las oportunas copias, lo pronunciaremos mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Naudin.—Miguel Osca.—Antero de Echarri.—Joaquin de Palma y Vinuesa.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Jimenez de Palacio.

Publicación.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente de la Sala primera D. Ramon Lopez Vazquez, celebrando audiencia pública la misma Sala en el dia de hoy, de que yo el Escrivano de Cámara certifico.

Madrid 15 de setiembre de 1860.—Juan de Dios Rubio.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de setiembre de 1860, en los autos seguidos por D. Jose María Ponce de Leon, vecino del partido de Jiquima, contra D. Oscar Berbache, Conde de Roval, que lo es de la ciudad de la Habana, sobre rescisión del contrato de venta del ingenio *Industria*; autos pendientes ante Nos por haber sido admitido e recurso de casación que interpuso dicho Conde contra la sentencia dictada por la Sala primera de la Audiencia de la expresada ciudad, compuesta de tres Magistrados, por la que se confirmaron con costas la sentencia definitiva y la providencia aceleratoria de ésta, pronunciadas por el Alcalde mayor quinto de la misma ciudad:

Resultando que en 13 de diciembre de 1852 firmaron un contrato privado Ponce de Leon y el Conde, por el que el primero vendió al segundo el referido ingenio *Industria*, justamente con 42 negros de ambos sexos, y con los animales, trenes, máquina y demás efectos anejos á la finca; acordando los contrayentes varias cláusulas, y entre ellas las que siguen:

1.^a Que el Conde daba por el ingenio 118,150 pesos en esta forma: 18,150 que reconocía la finca del censo al 5 por 100 anual á favor del Marqués de la Real Proclamación: 10,000 de presente, de los que se dió el vendedor por entregado: 6,000 que satisfaría el comprador en 15 de marzo, y otros 6,000 en igual dia de mayo de 1853; y los 78,000 restantes pagaderos en los cinco años próximos siguientes á éste, á razón de 15,300 en cada uno.

2.^a Que el comprador se daba por entregado del ingenio, habiéndole visto y examinado á su satisfacción, y habiéndole hecho tradición y quasi tradición de lo que se le vendía, y que Ponce de Leon garantizaba que dicha finca tenía á la sazon 16 caballerías sembradas de caña.

5.^a Que si el comprador faltase al pago de los plazos estipulados, Ponce de Leon podría rescindir la venta ó ejecutarle por lo que éste le adeudara; y si el vendedor en virtud de ello reasumiese la finca, los desembolsos que hubiera hecho el comprador le serían devueltos en doble número de años, recibiendo bajo tal concepto al restituir la finca la mitad del contado que había exhibido, y la otra mitad después que se pagase en la misma forma lo que hubiere satisfecho de plazos, los que también se reintegrarian por mitad cada año.

6.^a Que si al tomar Ponce de Leon el ingenio hubiese mejoras de importancia y provenientes de la industria empleada por el Conde, se tasaran pericialmente del modo que se expresó: que estas mejoras se abonarian en el término de un año, principiado á contar desde la última entrega que hiciera el vendedor por cuenta del precio, y que las mejoras que (aqué parece faltar la palabra *no*) fuesen de necesidad indispensable para la finca, podría llevarse á las el Conde si á Ponce de Leon no le conviniese pagar nada por su avalúo.

10. Que el vendedor garantizaba al comprador que la máquina de vapor existente en el ingenio se hallaba en estado de moler y de empezar á hacer la zafra en 15 de aquel mes de diciembre, por tener todas las partes que al efecto cesitaba, sin responder el vendedor de ninguna averia que sobreviniese por cualquier accidente.

11. Que se obligaba Ponce de Leon á concluir la casa de vivienda que se estaba construyendo en la finca hasta que fuese habitable, y que la obra se terminaría en aquel mismo mes.

12. Que no se reducía el contrato á escritura pública en aquel dia por existir dos entredichos discernidos por el Tribunal de Guerra á los bienes de D. Manuel Espinosa Romero, de quien había heredado el ingenio la persona que se le había trasmitido a Ponce de Leon, y otros á los de aquella misma persona; pero que considerando los contrayentes, por lo que indicaron, que desde el entonces proximales de mayo estaría removido tal obsequio, estipulaban que antes del dia 10 del

indicado, mayo se formaría la enunciada escritura; y que si en ese plazo no se hubiesen removido por el vendedor los obstáculos que, al tiempo de este contrato obstruían la formación de aquella, restaría al comprador los 6,000 pesos que estaba obligado a entregar en 15 de mayo de 1853, y los exhibiría en el acto de otorgarse la escritura.

Y 13. Expresiva, entre otras cosas, de que si por defecto de la máquina ó de los trenes del ingenio no pudiera empezarse a mover en el dia siada 15 de aquel mes de diciembre, tendría el Conde el derecho de hacer reconocer aquella por peritos de su equitativa y á su costo en todo el proprio mes, para que conociese si por defecto en ella no había comenzado la malienda en la fecha convivida:

Resultando que promovidos autos por Ponce de Leon, en los que entabó ejecución contra el Conde en abril de 1853, por la cantidad de 6,000 pesos, importe del plazo vencido en 15 de marzo, se declaró aquella sin lugar, y se mandó devolverse los autos para que estableciera su acción en la vía correspondiente, decisión que fue confirmada en vista y existía en este mismo día aquél mismo año; y que instaurada otra demanda por el mismo Ponce también contra el Conde, reclamando de los 6,000 pesos, los jornales de los negros que tenía a sueldo y la formación de la escritura de compra-venta del ingenio, de que se trató, y sustanciada hasta recibirse el pliego, cuyo término se interrumpió por haber solicitado Ponce que se diera por satisfecha aquella demanda, para entablar otra sobre rescisión, se le tuvo al fin por separado á su perjuicio, segun auto de 20 de abril de 1854.

Resultando que en 23 de marzo del propio año de 1854 propuso Ponce de Leon la demanda del pleito actual, expidiendo en ella que mediante no haberle satisfecho el comprador los plazos vencidos en mayo del año próximo anterior y en 15 de aquel mismo marzo, debía restituirle la finca vendida; y pidiendo que se declarase rescindida la venta del ingenio y se mandase al Conde que se lo d. volviese:

Resultando que al contestar expresó el demandado que mediante la elección que Ponce de Leon había hecho de la vía judicial, no podía ya separarse de ella y acudir á la rescisión, sino seguir aquella, la cual, si antes había sido desestimada por intempestiva, actualmente podía continuarse, puesto que se hallaban removidos los obstáculos que impedían la formación de la escritura, y que el mismo tiempo que él había satisfecho al vendedor 10,000 pesos, éste había faltado á lo estipulado, porque no había concluido á su debido tiempo la casa de vivienda, ni era cierto que existiesen, según aseguró, las 16 caballerías sembradas de caña, faltando además objetos de consideración en el jardín, y no teniendo éste ni la extensión ni el valor que se le habían supuesto; por lo cual, y sosteniendo que había sufrido lesión grave y que ascendía á más de 40,000 pesos los daños y perjuicios que se le habían juzgado, terminó con la presentación de que se le absolviese, y de que se mandara que se abajase de del precio comprendido las faltas y perjuicios que reclamaba, se propusiese al otorgamiento de la escritura:

Resultando que seguido, el juicio y recibido el pliego, se practicaron varias pericias, otra parte, habiendo expuesto el demandado, en el oíro del escrito en que propuso la suya que, como convenía a la demanda recordada, al juzgado que había protestado los daños y perjuicios terminando el oíro con la conclusión de que se trataba por bracha esta justificación, que se reservaba entablar, si la juez de lo que resultase en definitiva en el pleito actual:

Resultando que en el alegato de bien probado del Conde se dijo, que se aceptaba la rescisión con lo que se le abajase al precio lo que, por cantidad y plazos faltos de satisfecho, las mejoras que tenía la finca

y las costas, daños y perjuicios gravísimos que el vendedor le había arrogado; haciendo, sólo pretendido en este escrito que se declarase sin lugar la rescisión, y se le reservase su derecho para reclamar de dicho vendedor las cantidades que le adquirió por los gastos que eran de cargo de aquél, y los daños y perjuicios que le había causado, así como, también para que se rebajaran del precio las cantidades que excedían de su legítimo valor.

Resultando en 28 de marzo de 1855, pronunció el Alcalde mayor la sentencia indicada al principio, por la que se declaró rescindido el contrato litigioso; y que en su virtud el demandante debía entregar el ingenio al demandante, y este al demandado en una partida el importe del precio que había el mismo demandado exhibido, y de las impensas útiles y necesarias que hubiese hecho en la Gaca, á cuyo efecto se fijarían previamente por peritos; pues que la entrega del ingenio e importe del precio e impensas debía ser simultánea, sin que ninguna de las partes pudiera pretender que precediese la una ni la otra:

Resultando que pedidaclaración de la precedente sentencia por Ponce de Leon, se dictó providencia en el mismo dia, para la que se declaró que la fijación de los peritos debía extenderse á las faltas y desmejoras, y deducirse su importe de las mejoras e impensas, útiles y necesarias, e abonarse por el comprador si no las hubiese, á cuyo fin se tendría presente el inventario por el que había sido entregada la finca;

Resultando que admitida la apelación interpuesta por el demandado, así de la sentencia como de la providencia acordatoria, preceudió en la segunda instancia la revocación de aquellas y absolución de la demanda; y que cuando á ella no hubiese lugar, se declarara que, además de las impensas útiles y necesarias, se le debían abonar antes de la entrega del ingenio todos los perjuicios que se le habían seguido por las injuridicas demandas de Ponce de Leon, embargos inoportunos y demás obstáculos que le habían precisado a presentarse en concurso de acreedores;

Resultando que sustanciada la apelación, recayo en 27 de setiembre del mismo año de 1856 la sentencia de la Audiencia, también juzgada aulas, por la que se confirmaron con costas la definitiva del Juzgado inferior y su claratoria:

Resultando que el Conde, alegando que nada se había provisto en la sentencia acerca de una de las excepciones propuestas, cual era la del resarcimiento de daños y perjuicios, y que por ello procedía que se le admitiese, según la regla tercera del título (debió decir artículo) 59 de la Real cédula de 30 de enero de 1855, la súplica, interpuso ésta y le fue denegada, por la Audiencia de la Habana:

Resultando que después propuso contra la misma sentencia recurso de casación, alegando que por ella se había infringido la ley 1.^a, tit. 1.^o, libro 10 de la Novísima Recopilación; la 30, tit. 23, Partida 3.^a, y la 33, tit. 5.^o, Partida 5.^a; y que también había sido violada la regla tercera del art. 59 de la expresada Real cédula de 1855:

Vistos en esta Sala de Indias:

Considerando, en cuanto al motivo de casación relativo á la forma alegada por el Conde de Roval, que por las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en este pleito se fallaron todos los puntos comprendidos en la demanda del autor, y se resolvió asimismo sobre todas y cada una de las excepciones propuestas por el demandado; que por tanto era improcedente la admisión de la súplica que el Conde interpuso, y que denegándola no se faltó á lo que previene la regla tercera del artículo 59 de la Real cédula de 30 de enero de 1855:

Considerando en quanto al recurso de casación en el fondo que la ley 1.^a, título 1.^o, libro 10 de la Novísima Recopilación, prescindiendo de fórmulas y solemnida-

des externas, y atendiendo sólo á la intención y voluntad de los que pactan o contraten, sanciona el principio general de que de cualquier manera que aparezca que uno quiso obligarse quedé obligado; que la sentencia contra la cual se interpone el recurso no contradice este principio, porque no establece que deban dejar de cumplirse las obligaciones contraídas, si no que apreciando por el contenido del documento privado que hicieron Ponce de Leon y Barbeche, y por el resultado de las pruebas, tales son las que contrajeron uno y otro, les condena á ambos á su cumplimiento, y por tanto no aparece infringida la citada ley.

Considerando que la 39, título 28 de la partida 3.^a determina de quien debe ser el señorío de los frutos de la heredad ajena cuando es vencido en juicio el vendedor de ella; y que no habiéndose tratado en este pleito de la restitución de frutos percibidos, ni es aplicable ni pudo haberse infringido por el fallido la expresada ley.

Considerando, por último, que al pactarse en la cláusula 5.^a del contrato de venta hecha por D. José María Ponce de Leon á D. Oscar Barbeche que si éste fallaba al pago de los plazos estipulados podría aquél ejecutarlo por lo que debiese e pedir la rescisión de la venta, se dio al Don José este derecho alternativo ó de elección en todos y cada uno de los períodos en que se faltara al cumplimiento de uno de los plazos; que la ley 38, tit. 5.^o, Partida 5.^o, trata señaladamente del caso en que una sola vez tenga el vendedor el derecho de pedir á su elección el cumplimiento del contrato ó su rescisión, prescribiendo para entonces que elegido uno de los medios no pueda después acudirse al otro; y que son por lo mismo diversos el caso actual y el de la ley citada, la que por tanto no ha podido ser infringida:

Fallamos que debe nos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Oscar Barbeche, Conde de Roval, á quien en su consecuencia condenamos en las costas y á la pérdida de la cantidad de que se obligó a responder para el recurso; cantidad que en caso de hacerse efectiva si llegase el

obligado á mejor suerte, se distribuirá con arreglo al artificio 218 de la cédula Real cédula de 1855.

Así por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta del Gobierno, lo proclamamos, mandamos y firmamos.

José Gamarrá y Cambonero. — Matilde García de la Cepa. — Miguel de Noja y Méndez. — Vicente Valor. — José Portilla. — Gabriel Cernuelo de Velasco. — Joaquín Melchor y Piñazo.

Publicación. — Leído y publicado sus la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Dn. José Gamarrá y Cambonero, Ministro del Supremo Tribunal de Justicia y Presidente de su Sala de Indias, de que yo el Secretario de S. M. y Escrivano de la mara certifico.

Madrid 18 de setiembre de 1860.— Pedro Sánchez de Ocaña.

CUARTA SECCIÓN.

Orense 1.^o de octubre de 1860. — El Director, Leóncio Pérez. — El Secretario, Joaquín Gutiérrez.

Juzgado de 1.^o instancia de Orense.

Don Bernardo María Herráiz, juez de primera instancia de Orense y su partido.

— Por el presente se cita, llama y emplaza por el término de nueve días á Don Juan el de Navia, de Palares, para que concorra á este juzgado á fin de practicarle diligencia de citación y emplazamiento para ante S. E. los Sres. del superior Tribunal, en causa criminal sumada contra Juan Róden por hurto de efectos; apercibiéndole que de no realizarlo en el plazo marcado, tendrá efecto aquella citación en los estrados, y le causará estado en el que se le practicase en persona. Dado en Orense á 25 de setiembre de 1860. — Bernardo María Herráiz.

— Demandado de S. S., Santos de la Torre.

Don Manuel Vázquez, Alguacil del Juzgado de primera instancia de Orense.

— Por el presente, y en virtud de sentencia dictada por el Sr. Juez de primera instancia del partido, se saca á pública subasta por término de veinte días, para hacer pago de 2.000 rs. que Francisco Reduelo, vecino de Souillo, adeuda a D. Manuel Fernández, Abad de Vilariño, un molino harinero, sito en el regalo llamado de Sequeros, constituye en sujeción, y sur caminos de carro que de Coles baja á Sequeros, norte y poniente con el citado arroyo, el cual fué tasado en la cantidad de 5.420 rs. Las personas que quieran interesar en su adquisición concurrán ante mí y el infrascrito Escrivano, á la casa de Ayuntamiento de Coles, señalándose para el remate el dia 18 de octubre próximo, de diez á once de la mañana.

Dado en Coles á 21 de setiembre de 1860. — Manuel Vázquez. — Por su mandado, Manuel María Vázquez.

Juzgado de paz de Ginzo de Limia.

Don Alejandro Alvarez, secretario del juzgado de paz del distrito de Ginzo de Limia. — Certifico que en el juicio verbal celebrado en este juzgado entre Gaspar Romero, de esta villa, y en rebeldía de Francisco Conde, de Paredes, recayo la siguiente sentencia:

En la villa de Ginzo de Limia á 27 de agosto de 1859.

El Lic. D. Gerardo Morena, primer suplente del juzgado de paz de la misma.

Habiendo visto el acta de juicio verbal celebrado en este dia entre D. Gaspar Romero, del Comercio de esta villa, y en rebeldía de Francisco Conde, vecino de Paredes, por antemano secretario, dije:

Resultando que D. Gaspar Romero demandó á Francisco Conde por la cantidad de 200 rs. que le adeuda, procedidos de gastos y otros artículos, que le vendió al siego:

Resultando que el demandado, sin embargo de haber sido citado en forma no cumplimentó el juicio:

Considerando que el demandante ha probado la certeza de su crédito, que también se demuestra por la falta de comparecencia del demandado:

Ballo que delice condenar y condena á Francisco Conde á que pague con las costas al D. Gaspar Romero los 200 rs. por que le demandó. Y por esta su sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncia, manda y firma de que certifico.

Gerardo Morena. — Alejandro Alvarez.

Así resulta de dicho juicio, á que me remito; y já sin de que se inserte en el Boletín oficial de esta provincia, conforme á lo prescrito en la ley de Ejecución civil, expido el presente, por duplicado, en Ginzo, á 22 de setiembre de 1863. — Alejandro Alvarez.

IMPRESA DE D. CESARIO PAZ Y H.